

persona las garantías que otorga el artículo quinto de la Constitución de la República. Vistas las constancias de autos, y atenta la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo pedido, fundándose en que Jesus Ambrosio no probó la escepcion alegada de ser hijo único de madre viuda á quien sostiene con su trabajo corporal. Considerando: que de esas constancias aparece comprobado que en Setiembre del año próximo anterior se aprehendió de leva al hijo de la promovente consignándosele forzado al servicio militar, y que si bien esa consignacion pudo verificarse en esa época por la suspension de garantías individuales establecida entonces por la ley, habiendo concluido esa suspension, restableciéndose la plena observancia del pacto fundamental de la República, la continuacion forzada de Ambrosio sirviendo como soldado, constituye la violacion que reclama. Por lo expuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se revoca la sentencia pronunciada en esta Capital el dia 16 de Julio próximo pasado por el Juez primero de Distrito negando el amparo pedido, y se declara lo siguiente: La justicia de la Union ampara y protege á Jesus Ambrosio, contra la determinacion por la cual se le retiene en el servicio de las armas sin su consentimiento en el Batallon de Infanteria número 15.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Petro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Al-*

LOMO IV.—PARTE II.

tamirano.—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 22 de Agosto de 1873.—*Ldo Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanaxuato por Damian Preciado, contra la Gefatura política de Silao, que lo juzgó como reo de robo con asalto y lo sentenció á la pena de muerte.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: en 24 de Marzo del presente año, Damian Preciado promovió el recurso de amparo contra la Gefatura política de Silao de la Victoria, por haberlo juzgado como reo de robo con asalto, y sentenciado á la pena de muerte, de la cual fué indultado por la Legislatura del Estado, designándosele la de quince años de prision que actualmente extingue en la Penitenciaría de Salamanca. En concepto del quejoso, los procedimientos de la Gefatura política de Silao violan en su persona la garantía individual consignada en el artículo 20 de la Constitución Federal, por no ser cierto que haya cometido el delito que se le atribuye. La autoridad responsable informó, que el quejoso había sido juzgado con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1872, que en su artículo primero suspendió el artículo constitucional en que se funda el recurso, para los salteadores y plagiarios.

De manera, que para decidir si debe concederse el amparo de los tribunales federales que se solicita, es necesario examinar si el quejoso está ó no comprendido en la ley de 18 de Mayo de 1871. En el término probatorio se presentaron como pruebas, el

testimonio de la causa instruida por el Gefe político de Silao, y una copia del parecer fiscal sobre la solicitud de indulto que pidió Damian Preciado. El hecho que motivó la formacion de esta causa, fué el asalto que sufrieron los vecinos de Benavente la noche del dia 27 de Setiembre de 1871. La existencia del delito está probada plenamente; pero no la culpabilidad del quejoso, estando en este punto conforme el que suscribe, con el parecer del C. Fiscal del Tribunal Supremo del Estado.

Examinando los fundamentos de la sentencia pronunciada por el Gefe político de Silao, en la parte que se refiere al reo Damian Preciado, aparece: que las pruebas de culpabilidad se reducen á indicios que no forman una prueba plena. Los hechos en que se fundan estos indicios son, ser el vestido del reo parecido en el color al del gefe de los bandidos que asaltaron á Benavente; haber dicho extrajudicialmente á dos de los procesados, que él era el gefe de la gavilla; no haber probado la escepcion de la coartada, ni que era hombre honrado. El indicio que resulta del primero de estos hechos no debe apreciarse; la confesion extrajudicial de los otros reos, no está probada, y de no haber demostrado que se encontraba en otro lugar el dia que se verificó el asalto, ni que era hombre de buena conducta, no se deduce necesariamente que haya concurrido á dicho asalto.

La prueba congetural ó de presunciones para que sea bastante para imponer una pena, es necesario que todos los hechos en que se funde estén probados plenamente y que de su conjunto se deduzca de una manera necesaria la culpabilidad del procesado. El Gefe político de Silao confiesa al concluir su sentencia, que no hay una prueba cuya claridad pueda compararse á la luz meridiana; pero que entre absolver por falta de una prueba de esta naturaleza ó imponer una pena, y tan grave como la de muerte, opta este último término, por ser

conforme con el espíritu de la ley de 18 de Mayo de 1871.

Esta ley, lo mismo que las demas que se han decretado suspendiendo algunas garantías individuales para los salteadores y plagiarios, debe interpretarse restrictivamente, y dice terminantemente que solo debe aplicarse á los reos de los delitos á que se refiere. Supone la prueba plena de la existencia del delito y de la culpabilidad del procesado exigida por las leyes vigentes y los principios establecidos en las leyes 12, tít. 14, Part. 3ª y 26, tít. 19, Part. 7ª son principios de justicia universal. El Gefe político de Silao admite la prueba no plena contra el reo, y rechaza declaraciones de testigos que lo favorecen por falta de formalidades.

Por las razones expuestas, está demostrado que Damian Preciado no debe considerarse comprendido en la ley de 18 de Mayo de 1871, y por este motivo, el Promotor fiscal pide: se sirva el Juzgado concederle el amparo de la Justicia de la Union que solicita.

Guanajuato, Mayo 19 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 10 de Mayo de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Damian Preciado contra el proceso que instruyó el Gefe del Partido de Silao, C. Jesus Lopez, condenándole á la pena de muerte por el robo cometido el 27 de Setiembre de 1871 en el rancho de Benavente; con cuyo proceso cree violadas el quejoso, algunas de las garantías que consagra el artículo 20 de la Constitucion; resultando, que la misma autoridad que sustanció el juicio criminal respectivo asienta en la sentencia que tuvo á bien pronunciar, que contra Preciado solo aparecen *vehementes sospechas* y *fueres presunciones*; pero no pruebas tan claras como la luz meridiana; y por consiguiente,

no está justificado que el quejoso sea autor del delito que se le imputa.

Considerando: que la ley de 18 de Mayo de 1871, con arreglo á la cual fué juzgado el promovente, no suspende las garantías de que habla, sino exclusivamente para los salteadores y plagiarios.

Considerando: que por no estar probado que el quejoso sea de los delincuentes comprendidos en dicha ley, éi se haya en el pleno goce y ejercicio de los derechos del hombre, sancionados en la carta fundamental de la República; de lo que se infiere, que con el derecho de no habérsele careado con los testigos que depusieron en su contra, ni facilitándosele los datos de la causa para preparar sus descargos, ni oírsele en defensa por sí ó por persona de su confianza ó por ambos, según su voluntad, se conculcaron en su perjuicio algunas de las fracciones del artículo constitucional citado; por tales razones, de conformidad con el pedimento fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Damian Preciado contra los procedimientos del C. Gefe del Partido de Silao, en virtud de los cuales fué juzgado y sentenciado á muerte el quejoso, como salteador, con violación de las fracciones tercera, cuarta y quinta de la Constitución Federal. Notifíquese este fallo á las partes, por los medios legales, y publíquese en el periódico oficial y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos de la ley. Así el C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó por ante mí el Escribano. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 17 de Mayo de 1873.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 26 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Guanajuato por el reo Damian Preciado, contra el proceso que le instruyó el Gefe del Partido de Silao, C. Jesus Lopez, condenándolo á la pena de muerte por el robo cometido el 27 de Setiembre de 1871 en el Rancho de Benavente, con cuyo proceso creé violadas el quejoso algunas de las garantías que otorga el artículo 20 de la Constitución general de la República: Vistas las constancias de autos, y apareciendo de ellas justificado el delito de que se acusa al promovente, y que la autoridad contra quien se solicitó el amparo ha obrado en la órbita de sus atribuciones, sin que sus procedimientos importen violación alguna de las garantías invocadas por Preciado en estos autos. Con tales fundamentos, y de conformidad con lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada en 10 de Mayo próximo pasado, por el Juez de Distrito de Guanajuato que concedió el amparo, y se declara: que la Justicia de la Unión, no ampara ni protege á Damian Preciado, contra los procedimientos del Gefe político de Silao, por no haber violación alguna de las garantías á que se refiere el quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Oastañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis*

Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, 11 de Octubre de 1873. *Lie. Enrique Lanla, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. Cesario Martínez, contra su consignacion al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que la solicitud de amparo presentada por el C. Cesario Martínez, se funda en la violacion del artículo quinto de la Constitución federal, por haber sido detenido contra su voluntad al servicio de las armas, en el cuerpo de infantería que ha organizado el C. Pedro Agüero con el caracter de teniente coronel de las fuerzas del Estado.

No siendo bastante el dicho del quejoso, y habiéndose negado el C. comandante Romualdo Dávila, inmediato ejecutor del acto reclamado, á dar el informe con justificacion que se le pidió, hubiera sido necesario abrir el término de pruebas para que se acreditasen los hechos, si el C. teniente coronel Agüero, como superior de aquel gefe, contestando el requerimiento que se le hizo á nombre de los Supremos Poderes de la Union para que ordenase al inferior la suspension de aquel acto, no hubiese demostrado que son ciertos los hechos que motivan la solicitud de amparo, al manifestar en el oficio de fojas 10, que no se consideraba con el deber de obsequiar dicha suspension, por creerla contraria á la Orden telegráfica del 18 de Octubre de este año, comunicada por el C. Ministro de Guerra, en la que se proviene á la fuerza federal

que no impida al representante de la autoridad se proporcione recursos para la fuerza de la poblacion. El telégrama dice: "Ya ordene al capitán Donaciano Félix, que no impida el que V. (se dirige al Sr. D. Juan Valdéz Ramos) como representante de la autoridad en ese punto, se proporcione recursos para la fuerza; y le prevenga que tanto él como el teniente coronel Paniat cuando llegue y tome el mando, impidan que esa poblacion sea atacada; y en caso de que lo fuere, unan su fuerza á la de la poblacion para defenderla, manifestando á los que pretendan usar de la fuerza para tomarla, que el Presidente no autoriza las vías de hecho, sino que los deja en libertad para usar de su derecho."

Diversas interpretaciones se han hecho de esta Orden; para unos solo debe entenderse como *fuerza de la poblacion*, la que organice el comercio y los ciudadanos pacíficos para evitar los cateos y ataques á la propiedad; para otros significa una proteccion indirecta, al sostenimiento de las fuerzas que se organizan en favor de una de las partes contendientes, en que por desgracia está dividido el Estado.

Sin necesidad de calificar la exactitud de estas interpretaciones, es evidente que dicha Orden no importa una suspension de las garantías individuales consignadas en la Carta federal, ni una derogacion de los preceptos legales, que prescriben la obediencia á las disposiciones de la Justicia de la Union.

Otra de las causas que manifiesta el expresado C. Teniente Coronel, para negarse á ordenar al inferior la suspension del acto reclamado, es la de no reconocer á V. como Juez de Distrito, por no haber protestado guardar las reformas y adiciones constitucionales últimamente promulgadas. La falta de fundamento de esta causa, está demostrada en el oficio que ese Juzgado le dirigió en contestacion, por una mala deferencia y urbanidad. Allí se le advierte, que por Orden del Ministerio de Justicia, á cau-